

CONCURRENCIA Y PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN MÉXICO. EFECTOS DE LAS VARIABLES INSTITUCIONALES

MARCELA ÁVILA EGGLETON

TEMA II. PROCESOS ELECTORALES COMPARADOS

PREPARADO PARA PRESENTARSE EN EL XXXI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ELECTORALES: LOS DILEMAS DE LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE DE 2020, GUADALAJARA JALISCO



La participación electoral, a pesar de haberse convertido en uno de los temas centrales de los estudios sobre comportamiento electoral a lo largo de más de seis décadas, sigue presentando importantes desafíos para los estudiosos en la materia. Los argumentos que buscan explicar los cambios en las tendencias de participación en las democracias occidentales van desde la pérdida de interés por la política, hasta discrepancias en torno a los criterios de medición, pasando por los esfuerzos de movilización electoral de los partidos, la capacidad de los ciudadanos para procesar información y las facilidades –o problemas– para el registro y la emisión del sufragio.

En el caso de México, la coincidencia de las elecciones locales con las federales, especialmente de la presidencial, se ha señalado como una de las variables que promueve la asistencia de más votantes a las urnas. Los datos dan cuenta de que en los últimos años comenzó a revertirse la tendencia a la baja en la participación que inició en 1994, al tiempo que, como resultado de la reforma de 2007 al artículo 116 constitucional¹ se incrementaban las elecciones locales coincidentes con la federal, pasando de 10 en 2006 a 12 en 2009, 15 en 2012, 17 en 2015 y 30 en 2018.


¹ La reforma establece que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral deben garantizar que las elecciones se lleven a cabo el primer domingo de julio¹ del año que corresponda. La reforma de 2014 modifica la fecha de los comicios al primer domingo de junio.

Este trabajo busca medir el impacto de la concurrencia en la participación en elecciones federales en México, así como el efecto conjunto de la concurrencia con el tipo de elección. Evidentemente, no es lo mismo afirmar que la concurrencia de las elecciones locales, con las federales, eleva la participación que evaluar estadísticamente el volumen de ese impacto.

El trabajo se estructura en tres apartados. El primero, presenta una breve contextualización de la participación electoral en México en los últimos años. En el segundo, se lleva a cabo una revisión de la literatura sobre las determinantes de la participación electoral, así como el planteamiento teórico sobre el que se sustenta el análisis. En el tercero se hace un análisis descriptivo de los efectos de la concurrencia y el ciclo electoral en México en los últimos seis procesos electorales para pasar, posteriormente, a un análisis estadístico que busca explicar los efectos diferenciados de la concurrencia y el ciclo electoral en las elecciones federales.



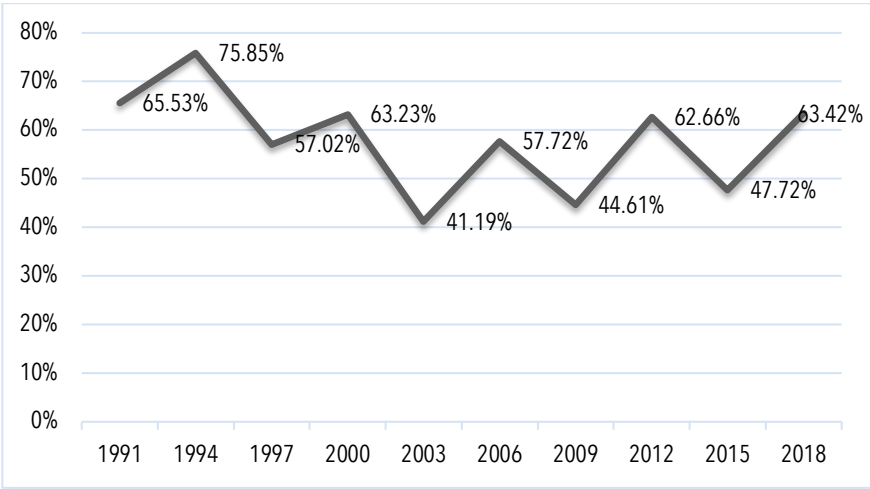
I. Algunos apuntes sobre la participación electoral en México



La participación en los procesos electorales ha registrado una tendencia a la baja desde principios de los años noventa (Blais, 2007) misma que, con sus particularidades producto del proceso de transición democrática, se vio reflejada en México a partir de 1994. Diversos estudios (Buendía, 2000; Buendía & Somuano, 2003; Holzner, 2007; Morales Garza, et al: 2011) documentan la caída en la participación argumentando una serie de factores de orden técnico, institucional, socioeconómico, político y del sistema de partidos.

La caída en la participación electoral a nivel federal llegó a su punto más bajo en la elección intermedia de 2003 e inició una recuperación a partir del proceso electoral federal de 2009 que se sostuvo en 2012.

TABLA 1. Participación en elecciones federales 1994-2018



Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Resultados Electorales Federales 1991-2015. Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones del Proceso Electoral 2017-2018. Instituto Federal Electoral / Instituto Nacional Electoral.

La elección federal de 2018 registró un incremento en la participación de 0.76% con respecto a 2012, equivalente a 6 millones 825,905 votos. Esto es, una participación 0.19% superior a la elección presidencial del 2000. Si bien el incremento en la participación es menor que el registrado entre 2006 y 2012 (4.98 puntos porcentuales), se mantiene la tendencia al alza.

Entre las causas del incremento en la participación a partir de 2009 cabría considerar al sector de jóvenes que votaban por primera vez² cuyo referente político más próximo era la elección de 2006; los efectos de la reforma electoral 2007-2008, en particular el nuevo modelo de comunicación política; la actualización del padrón electoral³ y el funcionamiento de la democracia. Sin embargo, al tratarse de un caso aislado, no podía esperarse que fuera el comienzo de una tendencia al alza en la participación. Si 2009 no fue un caso atípico, podría haber elementos comunes entre los procesos electorales de 2009, 2012, 2015 y 2018. Partiendo de la relevancia de los factores institucionales, el incremento en el número de entidades con elecciones concurrentes con la federal –12 en 2009, 15 en 2012, 17 en 2015 y 30 en 2018– podría ser uno de estos elementos comunes.

II. ¿Quiénes votan y por qué?

Blais (2007) completa las tres respuestas a “¿por qué la gente no vota?” propuestas por Verba, Brady y Scholzman (1995) añadiendo una cuarta: los ciudadanos no participan *porque no pueden, porque no quieren, porque nadie se los ha pedido, o porque no importa*. Los electores tienen que contar con los recursos materiales, cognitivos y la oportunidad de emitir su voto; deben estar interesados en el estado del funcionamiento del todo o una parte del sistema político y considerar que el voto es una herramienta útil

² En el periodo comprendido entre 2006 y 2012 se sumaron al padrón, por concepto de “Inscripción al Registro Federal de Electores”, 18 millones 418 mil nuevos votantes, que representaban el 23.18% de la lista nominal de 2012.

³ La actualización del padrón electoral en todos sus rubros –inscripción, reposición, renovación y corrección de datos– incrementó en 10.14% el porcentaje de ciudadanos que, de hecho podían emitir su voto en 2012 en comparación con 2006.

para modificar o reforzar dicho sistema; deben sentir que los partidos o candidatos se han acercado a ellos, ya sea directamente, a través de su equipo, o a través de una campaña exitosa que apele a sus intereses; y, de acuerdo a la teoría economicista de la acción política, los ciudadanos votarán sólo cuando consideren que su voto importa, que haría la diferencia entre el triunfo y la derrota del candidato de su preferencia en un escenario de competencia libre.

Una revisión preliminar de las distintas variables explicativas que se han propuesto para resolver las preguntas que rodean a la participación política parte de la falta de consenso producto de la ausencia de modelos teóricos sólidos; a pesar de ello –como se señala en torno a los estudios que se han realizado para el caso mexicano– algunas de las variables que han mostrado tener mayor poder explicativo son las socio-económicas, políticas e institucionales (Geys, 2006).

Entre las variables socio-económicas más utilizadas destaca el *tamaño de la población*, como factor para la evaluación que hacen los ciudadanos sobre la posibilidad de marcar la diferencia con su voto (Filer & Kenny, 1980; Hansen, 1994; Blais & Dobrzynska, 1998); la *concentración de la población* en zonas urbanas o rurales (Preuss, 1981; Cox & Munger, 1989; Filer, Kenny & Morton 1993); la *estabilidad de la población* como factor para evaluar el impacto a futuro del voto en legislación (Filer et al., 1993; Hoffman-Martinot, 1994); la *homogeneidad de la población* (Zimmer, 1976; Oberholzer-Gee & Waldfogel, 2001) y; el *voto en la última elección* bajo el principio de que si los electores se sintieron recompensados por el voto en las elecciones anteriores y el desempeño consecuente del partido ganador, tendrán más incentivos para votar de nuevo (Bendor, Diermeier & Ting, 2003; Fowler, 2004).

Algunas mediciones que toman en cuenta características sociodemográficas han encontrado que los jóvenes son el grupo poblacional que más se abstiene de participar, aunque las razones no sean muy claras; de tal forma que los grupos que más participan son aquellos adultos entre cincuenta y sesenta años, la mayoría hombres casados. Sin embargo, contradiciendo a este postulado, Morales Garza, *et al.* (2011) encontraron que aquellos ciudadanos mexicanos que se abstienen más de votar son los que tienen más alta escolaridad e ingresos medios debido a que no logran ver traducido el esfuerzo personal que entraña una educación mayor en mejores niveles de vida. En el mismo trabajo, encuentran que el grado de modernización de los ciudadanos explica en buena medida la participación electoral; los actores modernos y los premodernos tradicionales -a diferencia de los postmodernos y los tipos mixtos- son los que presentan niveles más bajos de abstención, aunque por razones distintas; los primeros, como parte de una agenda de actitudes y actividades propias de quienes apoyan a las instituciones democráticas y, los segundos, como respuesta a decisiones colectivas, intereses corporativos o privilegios del sistema.

Las variables políticas incluyen el *margen de diferencia* entre el primero y segundo lugar, como evaluación de la importancia del voto individual para hacer una diferencia en el resultado (Matsusaka & Palda, 1993; Franklin, 2004; Simonovits, 2012); el *gasto en las campañas*, aunque el resultado puede depender del mensaje utilizado, del partido que lo utiliza o de las elecciones en las que se presenta (Chapman & Palda, 1983; Hogan, 1999; Lau & Pomper, 2001), y; la *fragmentación política* (Dittrich and Johansen, 1983; Hansen, 1994; Blais & Dobrzynska, 1998).

Por último, las variables institucionales más utilizadas son el *sistema electoral*, en particular si el método de elección es por mayoría simple o por listas de representación proporcional (Ladner & Milner, 1999; Bowler et al., 2001; Chen, 2011); el *voto como obligación* (Blais, 2000; Perea, 2002); *la concurrencia de los procesos electorales* (Crain & Deaton, 1977; Wuffle, 1984; Henderson & McEwen, 2010) y; *los requisitos para votar* (Rosenstone & Wolfinger, 1978).



Si bien no es posible descartar categóricamente ninguno de estos tres tipos de variables, el presente trabajo se centra en las variables institucionales. El tipo de elecciones –si son presidenciales o legislativas– es el factor institucional que, para el caso mexicano, ha mostrado tener mayor poder explicativo. La concurrencia y el ciclo electoral tienen un impacto importante en términos de participación. Por un lado, existe una relación directa entre concurrencia y participación de modo que ésta se incrementa en la medida en que se llevan a cabo simultáneamente los procesos federales y locales; por el otro, la participación se incrementa cuando coincide la elección del ejecutivo y el legislativo. El arrastre de la elección presidencial es relevante en términos de participación, debido a que la importancia de una elección para los votantes está relacionada con su percepción del poder depositado en el puesto. También es de esperarse que se presenten más ciudadanos a votar en las elecciones presidenciales que en las intermedias debido a que el impacto de las campañas centradas en un personaje puede apelar más a los votantes (Blais, 2000).

Todo análisis de la participación electoral requiere, como premisa fundamental, revisar el problema clásico de la racionalidad de votar. Desde la perspectiva de Downs (1957) un votante racional acudirá a las urnas sólo en tanto la balanza de pagos le reporte más beneficios que costos ya que la decisión de votar está

mediada por la probabilidad de afectar el resultado, los beneficios de que el candidato o partido deseado gane, el valor que se le da individual o colectivamente a la democracia y los costos de votar. En la medida en que aumenten las primeras tres categorías y la cuarta disminuya, será más probable que los ciudadanos voten. Este postulado lleva a lo que se conoce como la “paradoja de votar” –o de no hacerlo– ya que, bajo este supuesto, en el mundo real nunca sería racional acudir a las urnas; aunado a ello, el modelo claramente no explica la existencia de participación en las democracias contemporáneas.

Con base en ello, Riker y Ordeshook (1968) postulan que será racional que el ciudadano acuda a las urnas en la medida en que existan “otros” beneficios derivados de votar, de modo que:

$$pB + D > c$$

Donde p es la probabilidad de que el voto individual decida el resultado de la elección, B es el beneficio de que el candidato del votante resulte electo, D es *cualquier otro beneficio* derivado de votar y c es el costo de votar. Partiendo de que p siempre es muy pequeña, votar no es racional a menos que D sea extremadamente grande. De acuerdo con este modelo, una D grande podría ser producto del interés de los ciudadanos por preservar un sistema democrático ante el riesgo de que una democracia sea insostenible sin participación; bajo ese supuesto, los electores percibirían un beneficio al cumplir con un deber moral –voto como conducta ética– o bien, al tener la posibilidad de expresarse—. Sin embargo, a pesar de que la utilidad producto del interés por preservar la democracia puede explicar la participación, el costo resulta muy alto ya que implica que la participación electoral es producto de cálculos individuales

que nada tienen que ver con elegir a representantes y/o gobernantes; es decir, las causas de la participación en el juego democrático excluyen el presupuesto central de toda democracia representativa (Geys, 2006).

Si bien diversos autores se han centrado en construir modelos que logren integrar la realidad empírica a los modelos de racionalidad que buscan explicar la participación, lo cierto es que la pregunta fundamental sigue siendo determinar ¿qué factores generarían un modelo con una D grande? Grofman (1993) propone definir la forma en que la participación se modifica como resultado de factores institucionales que incentiven la participación; a lo que Cox (1999) responde con un modelo que teoriza sobre los incentivos institucionales que llevarían a los partidos a movilizar a los votantes y a éstos, a acudir a las urnas.

El planteamiento de Cox (1999) a favor de la concurrencia se basa en los incentivos que tienen los partidos para participar con miras a maximizar su impacto en la toma de decisiones –vía posiciones en el ejecutivo o impacto en la legislación–. Cuando en una elección están en juego todas las posiciones políticas, los partidos tienen grandes incentivos para participar; cuando sólo se compite por algunas posiciones –p.e. elecciones intermedias sin concurrencia a nivel local–, el poder de decisión que está en condiciones de obtener cada partido declina. Bajo esta lógica, la concurrencia genera mayor participación en la medida en que hay incentivos para los partidos y estos se ven obligados a movilizar votantes. Los incentivos de los partidos se incrementan en tanto los esfuerzos de movilización se traducen más efectivamente en votos, los votos en escaños y los escaños en carteras en el gobierno.

Este modelo maximiza la racionalidad de los partidos pero se centra en votantes poco sofisticados que estarían en condiciones de participar o no, dependiendo de los incentivos que les generen los partidos;

esto es, los electores acudirían a las urnas en tanto los partidos estén interesados en hacerlos participar. El tema de fondo es si estos incentivos son suficientemente significativos para los votantes, lo que nos haría volver a la pregunta inicial sobre cómo lograr, vía incentivos institucionales, una D grande. Es claro que la concurrencia y el ciclo electoral pueden generar incentivos a la participación de los partidos pero no necesariamente incrementan de manera directa los de los electores. Bajo este supuesto, la respuesta podría estar en el planteamiento en torno a los efectos diferenciados planteado por Anderson (2007).

Bajo este modelo, la participación puede explicarse a partir de efectos directos, que se presentan cuando las decisiones de los votantes son influenciadas por los incentivos que proveen las reglas o el contexto; efectos indirectos, cuando las estructuras afectan alguna variable interviniente que se convierte en la causa inmediata de la variable dependiente y; efectos contingentes que muestran que el efecto de alguna variable estructural en el comportamiento del elector se fortalece o debilita dependiendo de la presencia de una tercer variable. De este modo, la participación sería un efecto indirecto producto del impacto que tiene el diseño institucional –en este caso concurrencia y ciclo electoral– en los partidos políticos.

III. Ciclo electoral y concurrencia. El juego en cifras

Para analizar los efectos del ciclo electoral y la concurrencia en la participación electoral en los procesos federales en México, se construyó una base de datos que incluye indicadores de participación por estado en las elecciones para diputados federales de mayoría relativa para cada elección desde 1997. De este modo, se tiene la participación por entidad federativa de ocho procesos electorales federales –cuatro

elecciones presidenciales (donde se eligieron senadores y diputados federales) y cuatro legislativas (donde se eligieron diputados federales).

El análisis de los ocho procesos electorales federales da cuenta, en primer lugar, de que la concurrencia – entre procesos federales y locales– tiene efectos diferenciados dependiendo del ciclo electoral; esto es, el peso de la concurrencia es mayor en las elecciones intermedias que en las presidenciales.

En 2003, la participación electoral fue del 41.2% y se llevaron a cabo diez elecciones concurrentes; de las cuales, seis tuvieron concurrencia completa –gobernador, congreso local y ayuntamientos–, nueve eligieron congreso local y ayuntamientos⁴ y una, sólo congreso local. Para 2009, la participación se incrementó en un 3.4% alcanzando el 44.6% con concurrencia en doce⁵ entidades, de las cuales, seis eligieron gobernador, congreso local y ayuntamientos y, seis más, congreso local y ayuntamientos⁶.

Si bien es clara la evidencia de la disminución de la participación en las elecciones legislativas, la concurrencia entre elecciones federales y locales, especialmente cuando coincide con la elección de gobernador, genera un incremento en la participación. Si nos centramos en el proceso electoral de 2012, la participación en las entidades con elecciones coincidentes fue, en promedio, más alta que la media nacional. En la elección para diputados de mayoría relativa, la media nacional fue 62.14%, en las 17



⁴ El Distrito Federal eligió Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales.

⁵ Aunado a los 12 procesos que se mencionan, en 2009 se llevaron a cabo elecciones en Tabasco y Coahuila, sin embargo la fecha de elección no coincidió con la elección federal y elecciones extraordinarias en cuatro entidades: Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo y Jalisco.

⁶ De nuevo el Distrito Federal se agrupa en esta categoría aunque su elección es para Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales.

entidades sin elección coincidente 59.7%, en las 15 entidades con coincidencia incompleta 62.98% y en las 7 entidades con elección de gobernador 67.08%.

Como se señala a lo largo del texto, la evidencia es clara en torno a que la participación en elecciones presidenciales es mayor que en las intermedias; sin embargo, una primera aportación del análisis de los datos es que no sólo varía la participación sino que el efecto de la concurrencia es, también, diferenciado – se volverá sobre este argumento con mayor profundidad más adelante–.

Se observa que la participación se incrementa en los procesos presidenciales pero el peso de la concurrencia se reduce. Para el caso de las elecciones intermedias, las entidades con mayor participación son aquellas con concurrencia y, marcadamente, con concurrencia completa.


Otro elemento que resulta preciso destacar es que la concurrencia tiene efectos diferenciados para cada entidad sin importar el ciclo electoral. Quizá, uno de los más destacados es que si bien la tendencia nacional es de revertir la tendencia a la caída en la participación a partir de 2009; hay 7 entidades⁷; tres de ellas concurrentes, donde baja la participación en 2009 con relación a 2003: la Ciudad de México, Guerrero y Jalisco.

Más allá del análisis descriptivo por entidad, la principal aportación de este trabajo es el impacto conjunto y diferenciado del ciclo electoral y la concurrencia en la participación electoral en México de manera agregada. Si bien algunos estudios (Morales Garza, et al: 2011) han mostrado que el valor explicativo de

⁷ Las entidades son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero y Jalisco.

la concurrencia se redujo en el periodo comprendido entre 1997 y 2009, para el análisis de los ocho procesos electorales aquí analizados –1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018– el efecto de la interacción de las dos variables es relevante para explicar la participación electoral.

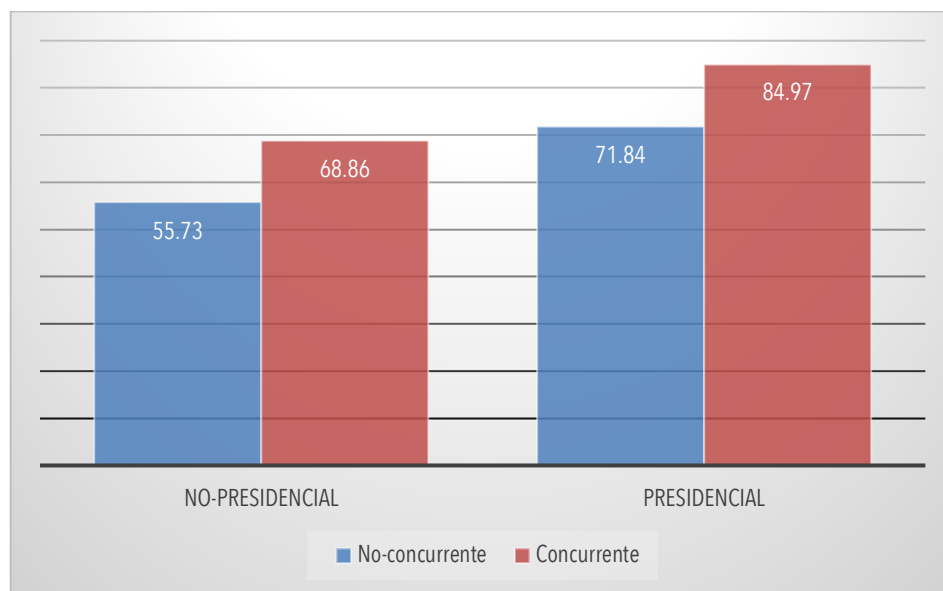
El modelo incluye como variable dependiente la *participación electoral* y como variables independientes el *ciclo electoral* –elección presidencial o intermedia– y la *concurrencia* –concurrencia *completa* cuando la elección federal coincide con la local para gobernador, ayuntamientos y congreso local; concurrencia *incompleta* cuando la federal coincide con la elección de ayuntamientos y congreso local y; no concurrencia de elección federal con la local–. Tiene una R^2 de 0.086, que indica que puede explicar el 8.6% de la variabilidad en la participación promedio de las entidades federativas.



Dos elementos a considerar es que el peso de la concurrencia como valor explicativo se reduce para el proceso electoral de 2018. Hasta 2012 la R^2 de 0.6003, para 2018 baja a 0.086. Asimismo, a diferencia de los procesos electorales previos a 2018, no se observa diferencia significativa entre la concurrencia completa y la concurrencia incompleta.

De este modo, para las elecciones intermedias habría una participación estimada de 55.73% para las entidades sin concurrencia, con un incremento de 16.11 puntos porcentuales cuando la elección es presidencial sin concurrencia y un incremento de 13.13 puntos porcentuales cuando hay concurrencia.

TABLA 2. Participación en elecciones intermedias y presidenciales (con y sin concurrencia)



Fuente: Cálculos propios con datos del Atlas de Resultados Electorales Federales 1991-2015. Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones del Proceso Electoral 2017-2018. Instituto Federal Electoral / Instituto Nacional Electoral.

Con base en el modelo aplicado hasta 2012, una elección presidencial con concurrencia incompleta tendría una participación esperada 22.8% ($13.2 + 9.6$) mayor que una elección intermedia no concurrente. Sin embargo, cuando se presenta esa combinación –presidencial y concurrencia incompleta– el efecto de la interacción resulta en un coeficiente negativo por lo que el porcentaje de votación se reduce en -.5%, de modo que el incremento en la votación esperada es de 22.3%. A este respecto habría que subrayar que el efecto de esta combinación es muy pequeño –.5%–, y no es significativo al tener un valor p muy grande. Esta condición significa que los efectos de la concurrencia incompleta y de una coincidencia con elección presidencial son independientes; una elección puede favorecerse de uno o ambos factores sin que la

presencia de ambos al mismo tiempo sea distinta a la suma de los efectos de cada condición individual.

Para el caso de 2018, no hay efecto de interacción entre las variables.

V. Consideraciones Finales

El análisis que aquí se presenta apunta a dos conclusiones centrales. En primer lugar, el peso de las variables institucionales, específicamente la concurrencia y el ciclo electoral como causales de la participación y; en segundo lugar, los efectos diferenciados de los mecanismos institucionales en función del contexto político en el que se desarrollan –lo que apunta de nuevo al impacto de las dos variables que se analizan a lo largo de este trabajo–.

A partir del análisis de datos agregados que aquí se presenta, resulta clara la relación entre concurrencia entre elecciones federales y locales con el tipo de elección –presidencial o intermedia–, sin embargo, a pesar del gran poder explicativo del modelo, falta profundizar sobre las relaciones causales lo que nos lleva, en el fondo, a seguir pensando en torno a una teoría sólida que explique consistentemente la participación electoral.

Si el modelo de Cox (2009) abona a la explicación de las motivaciones de los partidos, resulta aún más relevante abundar sobre las de los votantes más allá de responder a los esfuerzos de los partidos para movilizarlos. Ahora bien, a pesar de el peso de la concurrencia en el incremento de la participación electoral, no todas las posiciones son a favor.

Los argumentos en contra de la concurrencia se centran en que desvincular los procesos locales de los federales genera arenas diferenciadas entre los diversos órdenes de gobierno lo que da viabilidad al fortalecimiento de los sistemas de partidos locales y, en consecuencia, de los sistemas políticos subnacionales. Asimismo, fortalecer los procesos locales permitiría incluir temas regionales y locales en las agendas de los partidos (Nikolenyi, 2010) lo que, en teoría, podría dar mayores incentivos a los votantes para acudir a las urnas –resolviendo con ello una de las incógnitas que genera el modelo de Cox–. Sin embargo, bajo ese argumento, no se ha evaluado el impacto que tendrían, las elecciones locales en las nacionales lo que, sería, de nueva cuenta, un elemento a favor de la concurrencia.

Más allá de las dudas, es claro que las elecciones locales han cobrado mayor importancia en la medida en que han incrementado su poder y responsabilidades y es por ello, que resulta relevante el análisis de los efectos diferenciados de las instituciones –y los contextos políticos– tanto en la arena federal como en la local.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anderson, C. J. (2007). "The interaction of structures and voter behavior". En D. J. Russell, & H.-D. Klingemann, *The Oxford Handbook of Political Behavior* (págs. 588-609). Oxford: Oxford University Press.

Blais, A. (2000). *To Vote or Not to Vote?: The Merits and Limits Rational Choice Theory*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

_____ (2007). "Turnout in elections". En R. J. Dalton, & H. Klingemann, *The Oxford Handbook of Political Institutions* (págs. 621-635). Oxford: Oxford University Press.

_____, & Aarts, K. (2006). "Electoral system and turnout". *Acta Política* (41), 180-196.

_____, & Dobrzynska, A. (1998). "Turnout in electoral democracies". *European Journal of Political Research* (33), 239-261.

Bendor, J., Diermeier, D., & Ting, M. (2003). "A behavioral model of turnout". *American Political Science Review*, 97 (2), 261-280.

Buendía, J. (2000). "El elector mexicano en los noventa: ¿Un nuevo tipo de votante?", en *Política y Gobierno*, vol. VII, núm. 2.

_____ y Somuano, F. (2003) "La participación electoral en las nuevas democracias: la elección presidencial en México". *Política y Gobierno*. Vol. X, núm. 2.

Chen, T. (2011). "Uncovering the micro-foundations of turnout and electoral systems". *Electoral Studies* (20), 295-308.

Cortés Guardado, M.A. & Espinoza Valle, V.A. (Coords.) (2007). *Elecciones concurrentes en México. Competencia, participación y voto diferenciado*. Guadalajara: EON / Universidad de Guadalajara.

Cox, G., & Munger, M. (1989). "Closeness, expenditures and turnout in U.S. House elections". *American Political Science Review* (83), 217-231.

_____. (1999). Electoral rules and the calculus of mobilization. *Legislative Studies Quarterly*, 24(3), 387-419.

Retrieved February 25, 2014.

Downs, A. (1957). *An economic theory of democracy*. New York: Harper.

Espinoza Valle, V. (2009). "Elecciones concurrentes de México". En Alcántara Sáez, M. & Hernández Norzagaray, E. (comps.) *México el Nuevo escenario político ante el bicentenario*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

Filer, J., Kenny, L & Morton, R. (1993). "Redistribution, income and voting". *American Journal of Political Science*, 37 (1), 63-87.

Fowler, J. (2004). "Habitual voting and behavioral turnout. Paper presented at the Annual PCS Conference", Baltimore, March 2004.

Geys, B. (2006). 'Rational' Theories of Voter Turnout: A Review. *Political Studies Review*, 4(1), 16-35.

- Grofman, B. (1993). Is turnout the paradox that ate rational choice theory. In B. Grofman (Ed.), *Information, participation, and choice: An economic theory of democracy in perspective* (pp. 93-103). Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Hansen, T. (1994). Local elections and local government performance. *Scandinavian Political Studies* (17), 1-30.
- Henderson, A., & McEwen, N. (2010). A comparative analysis of voter turnout in regional elections. *Electoral Studies*, 29(3), 405-416.
- Hoffman-Martinot, V. (1994). Voter turnout in French municipal elections. In L. Lopez-Nieto, *Local Elections in Europe*. Barcelona: Institut de ciencies politiquies i socials.
- Hogan, R. (1999). Campaign and contextual influences on voter participation in state legislative elections. *American Politics Quarterly*, 27 (4), 403-433.
- Holzner, C. (2007) Voz y voto: participación política y calidad de la democracia en México. *América Latina Hoy*, 45, Universidad de Salamanca. Salamanca.
- Ladner, A., & Milner, H. (1999). Do voters turn out more under proportional than majoritarian systems? The evidence from Swiss communal elections. *Electoral Studies*. (18), 235-250.
- Lau, R., & Pomper, G. (2001). Effects of negative campaigning on turnout in U.S. senate elections, 1988-98. *Journal of Politics*, 63 (3), 804-819.

Matsusaka, J., & Palda, F. (1993). The Downsian voter meets the ecological fallacy. *Public Choice*, 77, 855-878.

Morales Garza, M., Millán Valenzuela, H., Ávila Eggleton, M., & Fernández García, L. (2011). *Participación y Abstencionismo Electoral en México*. México: CONACYT/IFE/UAQ.

Niemi, R. G., Weisberg, H. F., & Kimball, D. C. (2011). *Controversies in voting behavior*. Washington, D.C.: CQ Press.

Nikolenyi, C. (2010). Concurrent elections and voter turnout: The effect of the de-linking of state elections on electoral participation in India's parliamentary polls, 1971-2004. *Political Studies*, 58(1), 214-233.

Norris, P. (2002). *Democratic Phoenix: Reinventing political activism*. Cambridge: Cambridge University Press.

Oberholzer-Gee, F., & Waldfogel, J. (2001). Electoral acceleration: the effect of minority population on minority voter turnout. NBER working paper, 8252 NBER.

Perea, E. (2002). Individual characteristics, institutional incentives and electoral abstention in Western Europe. *European Journal of Political Research* (41), 643-673.

Riker, W. H., & Ordeshook, P. C. (1968). A theory of the calculus of voting. *American Political Science Review*, 62(01), 25-42.

Rosenstone, S. J., & Wolfinger, R. E. (1978). The Effect of Registration Laws on Voter Turnout. *The American Political Science Review*, 72(1), 22.

Simonovits, G. (2012). "Competition and turnout revisited: The importance of measuring expected closeness accurately". *Electoral Studies*.

Shugart, M.S., & Carey, J.M. (1992). *Presidents and Assemblies. Constitutional Design and Electoral Dynamics*. Cambridge: Cambridge University Press.

_____ (1995) "The Electoral Cycle and Institutional Sources of Divided Presidential Government", *The American Political Science Review*, 89(02), 327-343.

Valdés Zurita, L. (2013) "De los grandes números al mapa del comportamiento electoral en 2012" *Revista Mexicana de Estudios Electorales*, 12. Disponible en <https://www.somee.org.mx/rmestudioselectorales/index.php/RMEstudiosElectorales/issue/view/2/showToc> (22/11/2013)

Verba, S., Schlozman, K., & Brady, H. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.